TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Sala Civil Familia

Bogotá D.C., tres de febrero de dos mil veintitrés

Referencia: 25899-31-03-001-2017-00011-01

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 18 de agosto 2022 dictado por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Zipaquirá, en el proceso ejecutivo que ICV Distribuciones SAS promovió en contra de Mariela Amado de Cuevas y Hernando Cuevas Amado.

ANTECEDENTES

1. El expediente da cuenta, en lo importante para decidir, que el litigio descrito se interpuso en función de que se disponga el recaudo forzoso de los instrumentos cambiarios signados en favor de la sociedad accionante, contienda coercitiva en la cual se tuvo por notificada a la demandada Amado de Cuevas, quien, de conformidad se conceptuó en decisiones precedentes, no presentó oposición alguna contra las pretensiones invocadas en el escrito inicial.

2. Luego que se dictó la sentencia y se dispusieron las medidas cautelares imploradas, la enjuiciada presentó un escrito

procurando la invalidez de las actuaciones expedidas con base en que no fue notificada en legal forma, pedimento que guarneció en los numerales 4 y 8 del precepto 133 del Código General del Proceso.

3. El juez, a través del auto apelado, rechazó de plano la pretensión con base en que la gestora no promovió su nulidad oportunamente, pues no la concurrió en su primera actuación

4. La encausada, presentó recurso de apelación para confrontar el despacho adverso de su pedido, esto, bajo la egida de que el fallador se equivocó en su raciocinio, en consideración a que su exigencia encuentra cabal fundamentación en el numeral 8° del precepto 133 del Código General del Proceso. Además, reseñó que el ordenamiento jurídico prohíba gestionar una invalidez procesal en cualquier oportunidad, sin importar si se actúo o no con antelación.

5. El juzgador, concedió el recurso vertical.

CONSIDERACIONES

Viene importante ilustrar que una solicitud de nulidad procesal puede rechazarse de plano en diferentes eventos, entre ellos, cuando su sustrato fáctico no se amolda a las causales gobernadas en la norma 133 del Código General del Proceso y, además, cuando el defecto denunciado no se alegó de manera

tempestiva; de ello informa el precepto 135 de la Ley 1564, al erigir que *“no podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla”*.

En esta controversia, la autoridad de primer orden rechazó la anulabilidad con soporte en que la ciudadana no denunció su indebido enteramiento, en el momento en que intervino por vez primera en el proceso, escenario que de estar configurado autorizaría esa actividad judicial, si se tiene que el legislador enlistó la oportunidad del pedido de invalidez como factor que sirve de guía para determinar si es viable o no rechazar *in limine* un pedido de ese calado.

Una vez se revisó el dossier, pudo evidenciarse que el juzgador anduvo acertado en su decisión, en consideración a que la ciudadana desperdició su primera actuación procesal para denunciar el yerro de indebida notificación, lo que de suyo constituía valladar para iniciar la invalidez formulada.

Son así las cosas porque la recurrente con antelación a su incidente procuró por la suspensión de la disputa con base en un acuerdo transaccional, pedimento que es anterior en consideración a que se aportó el 1º de junio de 2017 mientras que este incidente se planteó el 1º de agosto de 2022, de donde se sigue que con su

radicación se convalidó el yerro denunciado y se cerró la puerta de combatir la nulidad sometida a escrutinio, máxime cuando la parte en aquella petición anunció categóricamente que fue debidamente enterada de la providencia que hoy estima mal comunicada.

Debiéndose advertir que la presentación de esa petición surte efectos legales importantes que ahora no pueden desconocerse, menos cuando fue signada por la propia accionada e, incluso, autenticada ante un fedatario, de donde se sigue que aunque la encausada firmó ese pedimento sin el apoyo de un abogado, se tiene que el comunicado que lo recoge es una verdadera actuación de parte, no solamente porque menciona que la orden de apremio fue noticiada cabalmente, sino también porque en ese escrito se procuró un efecto jurídico específico y de alta connotación que eventualmente logró su cometido.

Por las razones descritas, se confirmará la determinación apelada.

DECISIÓN¹

¹ Para la resolución de la presente actuación se conformó el respectivo expediente de manera virtual, ello, siguiendo el protocolo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha actuación podrá ser consultada a través del link: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jlondons_cendoj_ramajudicial_gov_co/EjaU_s-Xvv5FnCtKIXGs0qIBbLjqbsricL1SPe4wy7LTqw?e=MIT5IK

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, **confirma** el pronunciamiento apelado. Sin condena en costas por no aparecer causadas.

Notifíquese y cúmplase,

Firmado electrónicamente

JAIME LONDOÑO SALAZAR

Magistrado

Firmado Por:
Jaime Londono Salazar
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f0eb177af21afbeb228debecb34025450e69a13f21774ec853805a0a5f5c4619**

Documento generado en 03/02/2023 09:03:52 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>